

# Los empresarios: proceso de paz y posconflicto en Colombia. Responsabilidad social

Mariela Márquez Quintero, Universidad Nacional de Colombia, Colombia  
Julián Andrés Restrepo Guzmán, Universidad Nacional de Colombia, Colombia

**Resumen:** La historia del conflicto armado en Colombia está marcada por una lucha de 50 años entre el Estado, grupos armados ilegales, el narcotráfico, y una sociedad civil inmersa en las confrontaciones. El país vive hoy unos de los hechos más importantes de su historia; una negociación de paz que busca una salida política a una guerra que aumentó los niveles de pobreza, exclusión e inequidad. Hoy el reto es asumir la etapa del posconflicto desde el perdón, la reconciliación, la tolerancia, la solución a los problemas sociales y políticos, y el aporte del sector privado y empresarial en la reconstrucción del tejido social de las comunidades y de los guerrilleros de las FARC, que suscribirán el acuerdo. Aporte que además de la tarea del Estado, reclama y requiere del apoyo de los industriales y empresarios en la reinserción, en la búsqueda de alternativas laborales a los desmovilizados como actores irregulares de la confrontación, paso fundamental para finiquitar el conflicto y llegar a la paz. Proceso de paz reconocido en los acuerdos internacionales, que busca cerrar la historia de un conflicto, tercero en el mundo después del de Medio Oriente y del de Birmania que lo anteceden en intensidad y tiempo.

**Palabras clave:** conflicto armado en Colombia, proceso de paz, posconflicto, empresarios, responsabilidad social

**Abstract:** The history of armed conflict in Colombia is marked by a 50-year struggle between the state, illegal armed groups, drug trafficking, and civil society immersed in confrontations. The country live today one of the most important events in its history; peace negotiations seeking a political solution to a war that increased levels of poverty, exclusion and inequality. Today the challenge is to assume the post-conflict stage for forgiveness, reconciliation, tolerance, the solution to the social and political problems and the contribution of the private and business sector in the reconstruction of the social fabric of communities and the guerrillas FARC, who will sign the agreement. Contribution that in addition to the task of the state, requires and demand the support of industrialists and entrepreneurs for reintegration in finding alternative employment for demobilized as actors of irregular confrontation, critical step to settle the conflict and achieve peace. Peace process recognized by international agreements, which seeks to close the story of a conflict, third in the world after the Middle East and Burma that precede it in intensity and time.

**Keywords:** Armed Conflict in Colombia, Peace Process, Post-Conflict, Businessmen, Social Responsibility

Uno de los hechos más importantes de la historia reciente en Colombia tiene relación con el proceso de paz que adelanta el gobierno con el grupo armado ilegal de las FARC-EP, alzado en armas hace cincuenta años. Es la negociación en la que más se ha avanzado en la historia reciente del país y en la que los ilegales aceptaron los diálogos con el apoyo del gobierno de Cuba y de la comunidad internacional.

La negociación y la búsqueda del acuerdo de paz están en un momento de importantes avances, además de lograr sentar en las mesas de diálogo a una guerrilla radical y obsecuente, en su momento con un reconocimiento internacional como grupo político armado y con un amplio poderío ideológico, territorial y militar.

Es un logro trascendental e histórico teniendo en cuenta que de los 58 conflictos armados que existen en el mundo, la confrontación armada en Colombia es una de las más reconocidas en el mundo por su efecto, intensidad y duración, después del conflicto de Birmania en Asia y la confrontación entre los israelitas y los palestinos en el medio oriente.

Hay que aceptar que el conflicto armado en Colombia es desde las realidades inmediatas y locales una guerra civil no declarada ni aceptada por el Estado y que tiene unas connotaciones y características únicas y *suigeneris*, más cuando los dineros del narcotráfico han alimentado las arcas, las



armas y los ideales de los grupos ilegales de extrema izquierda y de extrema derecha inmersos en la disputa ideológica y militar.

En 200 años de historia y de las 23 guerras civiles que ha registrado el país, la última confrontación ha afectado a cinco generaciones, una nación signada por la violencia, un recurrente histórico que viene del proceso de la colonización y la conquista española, que hoy afecta a 46 millones de nacionales en una guerra que ha sembrado el país de luto, viudas, huérfanos, dolor y pobreza, tal y como lo refiere el nobel de literatura Gabriel García Márquez (1994):

Esta encrucijada de destinos ha formado una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad. Nuestra insignia es la desmesura. En todo; en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos los unos a los otros por las ansias de vivir, nuestras violencia historia es la dinámica sobrante de nuestra guerra eterna contra la adversidad. En los colombianos sin duda el corazón mata la razón y esta es la encrucijada en el tercer milenio.

No se puede desconocer que uno de los mayores errores de los gobiernos de turno en Colombia fue no aplicar la paz como una política de Estado; también hay que reconocer que dada la magnitud y el efecto de la guerra, desde la década de los años ochenta del siglo XX, gobiernos de turno iniciaron un proceso de creación de instituciones y formulación de herramientas para ejecutar procesos de desmovilización, inserción y reintegro de los insurrectos a la vida civil.

Procesos que comenzaron a dar resultados en el nuevo siglo, más por una arremetida militar del anterior gobierno, por el ofrecimiento de incentivos financieros a los irregulares, y por el ofrecimiento del perdón de las penas con el sistema judicial, que por la solución a los altos niveles de inequidad, pobreza, desigualdad y corrupción que han alimentado la guerra en las últimas cinco décadas.

Actualmente existe en Colombia la Agencia Colombiana para la Reintegración que cuenta con presupuesto propio 95 por ciento del Estado, con el apoyo de cooperantes privados e internacionales, la relación del gobierno indica que 115 empresas en Colombia le apuestan a la reintegración y a la paz, además de 13 universidades con programas sociales.

Las cifras revelan que 30.612 personas fueron atendidas en el proceso de reintegración entre febrero del 2013 y enero del 2014, un 88 por ciento hombres, 11 por ciento mujeres, cifra que incluye a 16.810 guerrilleros de las FARC, 3.403 del ELN, y 441 de otros en desmovilizaciones individuales; colectivas la de las Autodefensas Unidas de Colombia 31.696, aplicada en la ley de Verdad, Justicia, Reparación y Perdón entre el 2004 y el 2008.

La misión de la Agencia colombiana para la reintegración, ACR, es impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible, contribuyendo a la paz, la seguridad y la convivencia ciudadana. Propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos y lograr que en el año 2.020 se llegue a la paz, a la seguridad y a la convivencia absoluta ([www.agenciaparalareintegraciónenColombia](http://www.agenciaparalareintegraciónenColombia)).

De ahí que no se pueda desconocer que una de las grandes encrucijadas que tiene Colombia en la actual negociación que se adelanta en La Habana en Cuba, es que en una etapa de posconflicto se defina cuál será el futuro de cerca de doce mil guerrilleros, que hoy hacen parte de la insurgencia armada.

Para los expertos, no será un proceso fácil teniendo en cuenta que en la agenda motivo de negociación en la ley que dio el marco jurídico para la paz, no hace énfasis en factores especial como el perdón y la reconciliación, en los recursos económicos y los procesos de asimilación en las regiones de la llegada de los ilegales desarmados y con propósitos de reintegrarse a la vida civil.

El Estado, y los empresarios e industriales del país deben asumir desde las soluciones la problemática de los desmovilizados y reinsertados, las comunidades y las regiones deben apoyar el proceso desde la aceptación y el reintegro de los irregulares a la vida civil. En los seis puntos de la agenda que se negocia en La Habana, en Cuba, de la solución a los problemas agrarios, los asuntos políticos, el narcotráfico, el del desarme, el de la desmovilización es quizás el que más expectativas genera, además del de las víctimas.

La Fundación Ideas para la Paz creada por empresarios desde 1.999 para analizar el tema del conflicto armado, en varios estudios realizados concluyó que el 61 por ciento de los desmovilizados no reincide, que el 40 por ciento vuelve a las actividades ilegales y que un 36 por ciento tiene factores de riesgo y de vulnerabilidad para el retorno a la ilegalidad.

Factores de vulnerabilidad que, según los expertos, van desde un nuevo reclutamiento del grupo ilegal al que perteneció u otro, por el nivel educativo bajo que reduce las opciones laborales, la falta de un núcleo familiar, los deseos de venganza, y el gusto por el poder que generan las armas.

Está además la expectativa que generan los acuerdos políticos entre el gobierno y los guerrilleros que lleven a que por la vía de la elección popular lleguen a instituciones políticas como el Congreso de la República, concejos y asambleas. Según la Asociación Nacional de Industriales - Andi, este último punto genera rechazo, controversia y recelo. De ahí las recomendaciones de la experta Carolina Herrera y otros (2014), quienes manifiestan:

Un mayor nivel de confianza en el Estado reduce la probabilidad de reincidencia del desmovilizado. Por lo tanto, se sugieren a la Agencia Nacional para la Reintegración, ACR, varias acciones que contribuirían a incrementar la confianza del desmovilizado en el Estado. Por un lado, se debe seguir fortaleciendo una interlocución con las diferentes entidades en la que estas tengan en cuenta a los desmovilizados como una población que tiene que ser atendida prioritariamente para lograr la meta de la reconciliación nacional y la construcción de una paz sostenible y duradera, además de garantizar los recursos y adelantar un trabajo específico con el sector privado.

Pero sin duda una de las grandes preocupaciones es como se garantizaran los recursos para lograr financiar el posconflicto en Colombia en los 32 departamentos y cerca de 900 municipios afectados por la confrontación armada; no será fácil rescatar el valor de la confianza en los ilegales, en las comunidades afectadas y en la sociedad en general mientras no se mejoren las condiciones sociales y de inversión.

Sectores de inversión que tendrá que atender el Estado tras la firma de un acuerdo de paz, entre otros; los dineros para la consolidación institucional y estatal de territorios controlados cinco décadas por la guerrilla, los recursos para asumir el valor de un proceso de reinserción que involucrara a cerca de 12.000 guerrilleros de las FARC, y los gastos que implican la recuperación de los activos productivos que se perdieron con la guerra, además del factor social de las víctimas y el retorno definitivo a las regiones de conflicto.

Los análisis y estudios de la firma Raddar, señala que por el entramado económico que encierra al posconflicto, el Estado tendrá que desembolsar cerca de 22 billones de pesos anuales durante 20 años, lo que equivale más o menos a 18% o 20% del presupuesto nacional.

La revista Dinero, una de las más influyentes en asuntos económicos y sociales en Colombia, en un artículo titulado *¿cómo pagar la paz?* de octubre 10 del 2013 plantea varias alternativas: nuevos impuestos que generan rechazo por las 13 reformas tributarias aplicadas en el país en los últimos años, ampliar la instancia de la cooperación internacional de cerca de 30 países que colaboran actualmente, y la venta de vastas extensiones de tierra que están en poder de la guerrilla y recoger las utilidades que le genera el narcotraficante al grupo ilegal y que se fijan en 1.000 millones de pesos al año.

La revista cita un extenso estudio presentado por la decana de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Ana María Ibáñez (2011), quien concluye que:

El gasto en defensa de los países en épocas de posconflicto alcanza a representar 4,5% del PIB; es decir, que en Colombia estaría cerca de 1,7 puntos porcentuales por encima del gasto requerido en tiempos de paz, ese gasto adicional ocasiona pérdidas acumuladas durante la primera década de posconflicto, equivalentes a 17% de un año del PIB, además de la fuga de capitales que se profundiza al aumentar de 19,7% en la época de conflicto a 26,1% en la época del posconflicto.

Para los empresarios estas dificultades no son ajenas; además del efecto que ha tenido en el desarrollo empresarial e industrial del país el conflicto armado, una encuesta realizada con los directivos de 361 empresas advierte que el 75 por ciento de los empresarios está dispuesto a contribuir en

un proceso de paz, pero también un porcentaje igual admite que no aceptarían que por vías de impuestos se financie la reinserción y la desmovilización y en general el posconflicto.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales Andi, Bruc Mac Master, enfatiza en la oportunidad de las negociaciones de paz y reconoce la importancia de una salida política, pero ratifica las cifras de los investigadores que advierten que el 45 por ciento reconoce la presencia de actores armados ilegales en sus zonas de operación: 35 por ciento de las FARC, 35 por ciento de las bandas criminales del narcotráfico, bacrim y 20 por ciento del ELN, sin desconocer factores de desestabilización como la delincuencia común y el microtráfico de narcóticos.

El 44 por ciento del total de encuestados dijo haber enfrentado en la última década problemas relacionados con el conflicto armado; incremento de gastos en seguridad, pérdida de mercancías, reducción de las ventas, pérdida de clientes y amenazas o atentados contra los empleados.

Sin embargo, el líder empresarial reconoce que desde el 2004 que se iniciaron en forma las desmovilizaciones, hay una visión más positiva del ambiente de negocios: el 25 por ciento de los empresarios admitió la reducción de los problemas por conflicto armado, 15 por ciento afirmó que la situación sigue igual por la presencia también de bandas ilegales, Bacrim, dedicadas al narcotráfico, y un 23 por ciento admite que las condiciones de seguridad han variado positivamente en algunos aspectos.

En esta parte de las negociaciones de paz la situación de los empresarios e industriales e inversionistas no es fácil, quienes plantean dos síntomas de preocupación: la preparación y la receptividad de los ilegales en los núcleos empresariales de trabajo y cuál va a ser el futuro político de los cabecillas de los ilegales si el escenario les permitirá llegar a cargos de elección popular en el Congreso de la República, los concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones.

Esas preocupaciones hacen parte de un estudio adelantado por los expertos de la Fundación Ideas para la Paz, Ángela María Puentes; Álvaro José Moreno y Juliana Márquez, entre otros (2012), el cual advierte:

No obstante los industriales reconocer su importancia en la reintegración económica de excombatientes, cerca de un 80% de las empresas encuestadas se abstienen de participar en iniciativas orientadas a lograr la reinserción por el desconocimiento de los programas institucionales del gobierno; en segundo lugar, los empresarios señalaron que la no participación en este tipo de iniciativas se debe al temor por la seguridad de su empresa (22,8%) y por la retaliación de grupos armados (13,1%). En cuanto a las razones internas para no participar en iniciativas de reintegración, 18,6% de las empresas encuestadas argumentaron no tener mayores recursos.

El empresariado colombiano en diferentes foros y escenarios públicos y políticos ha exteriorizado su preocupación por los modelos de aplicación de la reincorporación que puede convertirse en un negocio para los ilegales, evadiendo y burlando a la justicia negando el reconocimiento de las víctimas y la petición pública de perdón.

Frente a los entornos laborales los industriales esperan que la Oficina de Alto Comisionado para la Reinserción garantice las condiciones necesarias para que las organizaciones no vean perturbadas las prácticas laborales, dadas las diferencias de los guerrilleros desmovilizados con el resto de ciudadanos, cómo hacer el reconocimiento público de su condición y cómo enfrentarlos a una vida laboral para la que no están capacitados ni preparados emocionalmente.

La propuesta del gobierno del presidente de la república Juan Manuel Santos plantea varios escenarios en los que se cuente con el apoyo de los empresarios, de la comunidad internacional y de los ciudadanos. Admite que no es una tarea fácil, más bien compleja y engorrosa pero ese es el reto, más cuando no se pueden desconocer las víctimas así como lo plantea el experto de la Universidad Javeriana de Colombia, Néstor Raúl Correa (2011):

Ahora bien, en la órbita de todo ese conflicto armado interno y de los procesos de reinserción, está la pregunta por los derechos de las víctimas, para tratar de resolver la tensión que media entre las concesiones a los reinsertados y el deber de reparar a las víctimas. Reinserción y reparación, he ahí el dilema. Reinserción, porque la justicia transicional exige hacer concesiones razonables a los grupos armados que se desmovilicen, que prestaron su concurso para lograr la paz y la reparación, y porque las víctimas de violaciones a los derechos consagrados en normas internas e internacionales, tienen derecho a una reparación integral.

Para la academia, sectores políticos y religiosos el entramado del asunto va más allá está en asumir el reto desde factores de inteligencia emocional, social y colectiva, en hacer del perdón y de la reconciliación el propósito más importante de la paz, de lo contrario se está arando en el desierto tal y como lo advierte el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Rubén Salazar en los mensajes enviados a los negociadores en La Habana, en Cuba.

## REFERENCIAS

- Barrero, E. (2006). *De Macondo a Mancuso: Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
- Corporación Medios para la Paz. (2000). *Las verdaderas intenciones de las FARC*. Bogotá: Editores Intermedio.
- Correa, N. R. (2011). *Reinserción y reparación*. Bogotá: Universidad Javeriana.
- Child, J. y otros. (1987). *Narcotráfico Imperio de la Cocaína*. Bogotá: Editorial Percepción.
- Chomsky, N. y otros. (2003). *Colombia de Vietnam al Amazonas*. Bogotá: Editorial Fica.
- Deas, M. (2001). *La paz y sus principios*. Bogotá: Editorial Alfaomega.
- Dinero (18 de septiembre de 2013). ¿Cómo pagar por la paz? Dinero. Disponible en: <http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/mecanismos-para-financiar-paz/184436>
- Fals Borda, O. y otros. (1963). *La violencia en Colombia: estudio de un proceso social*. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo.
- García Márquez, G. (1994). *No acabamos de saber quiénes somos*. Documento leído en la ceremonia de entrega del informe de la misión de ciencia, educación y desarrollo.
- Gómez, E. (2006). *La tragedia de la droga: Perspectiva de una solución*. Bogotá: Corporación Pensamiento Siglo XXI.
- Herrera, C. y otros. (2014). *Retorno a la legalidad y reinserción de excombatientes en Colombia*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
- Ibañez, A. M. (2011). *Oportunidades de desarrollo económico en el posconflicto*. Bogotá: Universidad de los Andes-Colombia.
- Latorre, M. (1986). *Hechos y crítica política*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Empresa Editorial.
- Lemoine, C. (2000). *Nosotros los colombianos del milenio*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Liévano Aguirre, I. (2002). *Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia*. Bogotá: Intermedio Editores.
- López, E. (2003). *Para pactar la paz*. Montería (Córdoba): Editorial Louis Ángel Asociados.
- Lozano, C. (2001). *Las Farc, el país que nos proponemos construir*. Bogotá: Editorial Oveja Negra.
- Palacio, M. (1995). *Entre la legitimidad y la violencia*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Pastrana, A. (2005). *La palabra bajo el fuego*. Bogotá: Editorial Planeta.
- Pizarro, E. (1991). *Las Farc, de las autodefensas a la combinación de todas las formas de lucha*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Posada Cobo, E. (2001). *Guerra civil ¿el lenguaje del conflicto en Colombia?* Bogotá: Ediciones Alfa Omega.
- Posada, E. (2002). *La ilegitimidad del Estado en Colombia*. Bogotá: Editorial Alfa Omega.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006). Hechos del callejón, 18. Disponible en: <http://www.pnud.org.co/hechosdepaz/echos/pdf/18.pdf>
- Programa de Reinserción Nacional. (2000). Los derechos humanos y el derecho internacional en los procesos de paz; 1990:2000. Edición Fundación Cultura Democrática.
- Puentes, Á. M. (2012). *Reinserción, economía y sector productivo en Colombia*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
- Redacción Portafolio.co (s/d). Empresarios ofrecen aportar recursos por la paz. Portafolio.co. Disponible en: <http://m.portafolio.co/economia/empresarios-ofrecen-aportar-recursos-la-paz>
- Redacción HSB Noticias (30 de octubre de 2013). Gobierno invitó a los empresarios que apoyen el post conflicto. HSB Noticias. Disponible en: <http://www.hsbnoticias.com/vernoticia.asp?ac=Gobierno-invito-a-los-empresarios-que-apoyen-el-post-conflicto&WPLACA=81331>
- Romano, V. (2002). *La formación de la mentalidad sumisa*. Cali (Valle): Editorial Artes Gráficas del Valle.
- Ronderos, M. T. (2000). *Manual para cubrir la guerra y la paz*. Bogotá: Editorial Correa.

- Turriago, G. (2003). *Estudio de los procesos de reinserción en Colombia*. Bogotá: Editorial Alfaomega.
- Valencia, A. (1992). *La humanización de la guerra*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Vargas, A. (2001). *Las fuerzas armadas en el conflicto colombiano*. Bogotá: Editorial Intermedio.
- Vélez Ramírez, H. (1998). *El conflicto armado en Colombia: negociación o guerra*. Cali (Valle): Editorial Universidad del Valle.
- Vicenti, F. (1998). *La reconciliación sostenible el mayor reto de la paz*. Bogotá: Editorial Ámbar.

## **SOBRE LOS AUTORES**

***Mariela Márquez Quintero:*** Docente de la Facultad de Administración, Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. Directora de Caracol Radio Colombia en Manizales - Cadena Radial, Periodista - Magister en Historia.

***Julián Andrés Restrepo Guzmán:*** Aspirante a Profesional en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales. Estudiante de Derecho de la Universidad de Caldas. Joven Investigador de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. Miembro del Grupo de Investigación Cultura de la Calidad de la Educación.